Para que el recurso de Habeas Corpus sea admitido y tramitado debe reunir los requisitos que exige el artículo 351 del C. de P. P.

Aunque la Ley N° 12654 declara extinguida la acción penal y la pena respecto de los condenados por Tribunales ordinarios por causas político-sociales, no es en el recurso de Habeas Corpus donde debe interpretarse sus alcances.

DICTAMEN FISCAL

Señor:

Alfredo Tello Salavarría y Héctor Pretell Cabosmalón afirmando que se encuentran detenidos en la Penitenciaría Central de Lima sufriendo pena privativa de la libertad en virtud de sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Correccional de Lima con fecha 5 de Diciembre de 1949 que los condenó a veinte años de penitenciaría por delito de homicidio en agravio de don Francisco Graña Garland; y sosteniendo que dicha sentencia ha quedado sin efecto por el mérito de la Ley N° 12651 de 28 de Julio de 1956, que concedió amnistía e indulto político a todos los civiles y militares procesados y condenados hasta esa fecha por Cortes Marciales, fueros privativos, Consejos de Guerra de cualquiera clase, militares, navales, de aeronáutica, de policía y Tribunales ordinarios por causas político sociales, interponen recurso de Habeas Corpus para que se ordene su inmediata libertad.

El Primer Tribunal Correccional de Lima ha declarado infundado el recurso de que se trata basándose en que este caso no es de competencia del Poder Judicial.

Del exámen de los autos resulta que dicho Tribunal no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 352 y 354 del Código de Procedimientos Penales, según los cuales antes de cualquier pronunciamiento es indispensable que se investigue por el Juez competente si son o no ciertas las afirmaciones del recurso.

No corre en efecto en el cuaderno examinado constancia de la detención de los recurrentes, ni del lugar en que se encuentran, ni copia de la sentencia o sentencias que puedan haber originado esa detención y que califiquen la naturaleza de la infracción.

Todo ésto es indispensable, pues sólo con el conocimiento de hechos comprobados puede pronunciarse la justicia.

No es aceptable, por otro lado, la tesis de que existe alguna ley de la que no puede conocer el Poder Judicial, por cuanto ello equivaldría a negarle su razón de ser y a ignorar su prerrogativa y potestad esencial de administrar justicia, dentro de la independencia de los tres poderes del Estado y en conformidad con el artículo 220 de la Constitución Nacional.

Es evidente, por todo lo expuesto, que la resolución recurrida adolece de nulidad, en conformidad con lo dispuesto por los incisos 1º y 11 del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales.

Este mismo criterio ya ha sido establecido por la Suprema Corte en numerosas ejecutorias pronunciadas en casos análogos, entre las que pueden citarse la de 30 de Junio de 1945 (Anales Judiciales pág. 162); de 23 de Abril de 1947 (Anales Judiciales pág. 439); de 10 de Julio de 1950 (causa N° 1116/49), de 10 de Octubre de 1950 (causa N° 148/50) y de 19 de Junio de 1951 (causa N° 371/50).

En consecuencia procede declarar NULO el recurrido a fin de que el Tribunal Correccional proceda conforme a ley.

Lima, 20 de Agosto de 1959.

ECHECOPAR GARCIA

RESOLUCION SUPREMA

Lima, catorce de Setiembre de mil novecientos cincuentinueve.

Vistos; con lo expuesto por el señor Fiscal; y considerando: que conforme al principio consagrado en el artículo sesentinueve de la Constitución Política del Estado y lo prescrito en el artículo

trescientos cuarentinueve del Código de Procedimientos Penales, el recurso extraordinario de Habeas Corpus es una institución destinada a garantizar la libertad de los ciudadanos y amparar los derechos individuales y sociales reconocidos por la Carta Fundamental, que sean violados; que, para que dicho recurso sea admitido y tramitado, debe reunir los requisitos que exige el artículo trescientos cincuentiuno del Código citado lo que no sucede en el presente caso, pues del propio tenor del escrito de fojas dos se desprende que los recurrentes se encuentran sufriendo condena de veinte años de penitenciaría por sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Correccional de esta Capital con fecha cinco de Diciembre de mil novecientos cuarentinueve por homicidio en la persona de Francisco Graña Garland; que si bien la Ley número doce mil seiscientos cincuenticuatro, en su artículo segundo, declara extinguida la acción penal y la pena, respecto de los condenados por los Tribunales ordinarios por causa político-sociales, disponiendo en el artículo quinto que sean puestos en inmediata libertad no es en el presente recurso extraordinario donde debe interpretarse sus alcances, en relación con los recurrentes, máxime cuando ellos mismos se limitan a manifestar en el referido escrito que han hecho gestiones para obtener su libertad en las que han fracasado sin precisar ante quienes realizaron esas gestiones y sin nominar tampoco los funcionarios responsables contra quienes ejercitan esta acción: declararon HABER NULIDAD en el auto recurrido de fojas tres, su fecha cinco de Febrero del presente año que declara infundado el recurso de Habeas Corpus interpuesto por Alfredo Tello Salavarría y Héctor Pretell Cabosmálón; reformándolo: declararon inadmisibile el mencionado recurso; debiendo archivar definitivamente el expediente; y los devolvieron.— GARMENDIA.— ALVA.— CEBREROS.— VALDEZ TUDELA.— Walter Ortiz Acha.— Secretario.

Mi voto de conformidad con el dictamen del señor Fiscal, es por que se declare NULO el auto recurrido, a fin de que el Tribunal Correccional proceda de conformidad con lo dispuesto en los artículos trescientos cincuentidos y trescientos cincuenticuatro del Código de Procedimientos Penales.— EGUREN.— Se publicó conforme a ley.— Walter Ortiz Acha.— Secretario.

Causa N° 1477/58.— Procede de Lima.